

# ASAMBLEA GENERAL

## SEXTO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales



SEXTA COMISION, 273a.

SESION

Miércoles 19 de diciembre de 1951,  
a las 11 horas

Palais de Chaillot, París

### SUMARIO

Página

Reservas a las convenciones multilaterales (*continuación*):

- |  |     |
|--|-----|
| a) Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su tercer período de sesiones (A/1858) (capítulo II: Reservas a las convenciones multilaterales)..... | 127 |
| b) Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (A/1874) .....                         | 127 |

Presidente: Sr. Manfred LACHS (Polonia).

#### Reservas a las convenciones multilaterales (*continuación*):

- a) Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su tercer período de sesiones (A/1858) (capítulo II: Reservas a las convenciones multilaterales)

[Tema 49 a)]\*

- b) Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio : opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (A/1874)

[Tema 50]\*

1. El Sr. OGRODZINSKI (Polonia) comprueba con pesar que se han confirmado los temores que la delegación de Polonia manifestó en la Sexta Comisión (244a. sesión) en el quinto período de sesiones: la opinión de la Corte Internacional de Justicia <sup>1</sup> y el dictamen de la Comisión de Derecho Internacional (A/1858) <sup>2</sup> no concuerdan. En el actual período de sesiones, el debate se ha centrado en dos concepciones: la de la voluntad absoluta de la mayoría y la del derecho soberano de cada Estado. Esta última concepción se funda en el derecho vigente. El sistema de conclusión de tratados se ha modificado desde el siglo XIX, época en que no podía concertarse ningún tratado sin el consentimiento unánime de todos los participantes. Actualmente, con frecuencia se concluyen tratados por mayoría. En compensación, las reservas permiten que la minoría haga adoptar sus puntos de vista. En la opinión de la Corte (p. 22) se señala que las reservas son corolario de la aplicación del principio de la mayoría en la conclusión de convenciones multilaterales. El

Sr. Ogrodzinski agrega que, si así no fuera, la minoría no sólo se vería privada de la posibilidad de influir en el tratado, sino también de la de adherirse a él en condiciones aceptables. Las objeciones a las reservas atentan contra los derechos de cada Estado y son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional.

2. La delegación de Polonia estima que todo el mundo ha de reconocer la institución de las reservas. La Sociedad de las Naciones las admitía y no hay razón alguna para que las Naciones Unidas renuncien a ellas. Sin las reservas, la minoría no podría decidir acerca de su participación en un tratado ni del grado de su participación.

3. El Sr. Ogrodzinski refuta la tesis de los partidarios del sistema llamado de la Sociedad de las Naciones, cuyos argumentos pueden clasificarse en tres categorías.

4. En primer lugar, según algunos, ese sistema es el método tradicional. El Sr. Ogrodzinski declara que esto es equivocado y que en un informe de expertos de la Sociedad de las Naciones se señaló, en 1927 <sup>3</sup>, que la aceptación y la adopción de las reservas equivale a la presentación de reservas durante las negociaciones. Pero en la práctica de la Sociedad de las Naciones se encuentran ejemplos de reservas hechas sin el consentimiento explícito de las demás partes contratantes, como en el caso de la adhesión de los Estados Unidos de América a la Convención Internacional de 1926 sobre la esclavitud. La necesidad del consentimiento en las reservas no es una regla de derecho internacional, como se hace constar en la opinión consultiva de la Corte (p. 24).

5. El Sr. Ogrodzinski refuta a continuación el argumento de que en un acuerdo internacional los contratantes no disfrutaban de igualdad de derechos. La repre-

\* Número de este tema en el programa de la Asamblea General.

<sup>1</sup> Véase: *Reservas a la Convención sobre el Genocidio, Opinión consultiva: C.I.J., Recueil 1951*, pag. 15.

<sup>2</sup> Véanse los *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto período de sesiones, Suplemento No. 9*, capítulo II.

<sup>3</sup> Véase: *Société des Nations, Journal Officiel*, páginas 880 a 882.



sentante de Francia (266a. sesión) afirmó que la regla de la mayoría garantizaría los derechos de los Estados que formularan reservas y privaría de derechos a los Estados que se opusieran a ellas. El Sr. Ogrodzinski estima, por el contrario, que los Estados, al formular reservas, ejercen un derecho soberano; y que el Estado que no las acepta comete una ingerencia en la competencia de otro Estado, que equivaldría a una ingerencia en las relaciones jurídicas entre los demás Estados si algunos de ellos aceptaran las reservas formuladas. Los Estados que estuvieran en mayoría tendrían así derechos mayores que los de todos los Estados de la minoría reunidos. Esta tesis conduce al absurdo, porque un solo Estado de la mayoría, al hacer objeciones, podría eliminar a todo un grupo de Estados.

6. Finalmente, los partidarios de un control de las reservas, como los representantes del Reino Unido y del Canadá, pretenden que con las reservas se correría el riesgo de modificar radicalmente el fondo de los tratados. El Sr. Ogrodzinski piensa, por el contrario, que si las reservas deformaran las convenciones hasta ese punto, ningún país las aceptaría. Si un Estado no tiene interés en una convención, no se adherirá a ella. Si, a la inversa, un Estado participa activamente en una negociación, es porque tiene la intención de adherirse a la convención; debe admitirse su buena voluntad y su deseo de cooperar. La presentación de reservas conduce sólo a una modificación del tratado, basada en la reciprocidad. Este principio ha sido aplicado muchas veces en derecho británico. La Sociedad de las Naciones, en 1930, se fundó también en dicho principio para definir el tratado multilateral como acuerdo en que cada parte encuentra en las obligaciones contraídas por las demás partes, una compensación a sus propias obligaciones.

7. Refutando la tesis de la integridad de las obligaciones multilaterales, el Sr. Ogrodzinski declara que una convención es un documento que constituye la base común de las relaciones recíprocas entre los contratantes. Reemplaza a varios tratados bilaterales, pero también contiene acuerdos particulares entre los diversos signatarios.

8. Rechazar las reservas llevaría a complicar el procedimiento de conclusión de tratados y a dificultar la cooperación internacional. El Sr. Ogrodzinski recuerda que hasta 1931 habían sido introducidas 259 reservas en los tratados concertados en la Sociedad de las Naciones, lo que muestra suficientemente que el sistema de reservas ya había adquirido carta de ciudadanía.

9. Examinando luego la práctica panamericana, el Sr. Ogrodzinski refuta los argumentos presentados con esa tesis, especialmente por el representante del Brasil (267a. sesión), quien ha pretendido que los vínculos que unen a los países de América Latina son tan débiles que el principio de las reservas no prueba su aproximación en el campo del derecho. Otros han afirmado que ese sistema sería aplicable a una organización regional, pero no lo sería en mayor escala. El Sr. Ogrodzinski considera que esta divergencia muestra la debilidad de esos argumentos. El sistema panamericano garantiza los mismos derechos a cada uno de los contratantes, lo que constituye una defensa de los intereses de la minoría.

10. Los adversarios del sistema panamericano pretenden que las reservas permiten que un Estado destruya todo el valor de un tratado. Pero los tratados

se fundan en el principio de la reciprocidad. A las obligaciones corresponden derechos. Los Estados sólo presentan reservas si sus intereses vitales lo exigen, cuando la mayoría no ha tomado en cuenta esos intereses.

11. La Comisión de Derecho Internacional ha tratado en su informe de imponer un sistema único, con el cual se correría el riesgo de ligar a los Estados contra su voluntad. La Corte Internacional de Justicia ha definido el derecho con ocasión de la Convención sobre el Genocidio, pero conviene deducir conclusiones más amplias de su dictamen.

12. No admitir las reservas sólo es posible en las convenciones en que la decisión de los contratantes deba ser absolutamente unánime. Si se permitiera que la mayoría decidiera de manera absoluta sobre la introducción de reservas, se suprimirían las garantías para la minoría. En consecuencia, la delegación de Polonia es partidaria del principio expuesto por la Corte Internacional de Justicia.

13. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) señala que los ejemplos citados por el representante de Bolivia, en la 269a. sesión, no constituyen verdaderas reservas, sino declaraciones de índole general que indican la actitud de un Estado acerca de un punto determinado. Una reserva es una declaración con la cual un Estado anuncia su intención de no asumir ciertas obligaciones contenidas en un tratado.

14. El Sr. Fitzmaurice está cada vez más persuadido de que actualmente la Sexta Comisión no puede adoptar una decisión acerca de las reservas. ¿Es necesario un nuevo estudio? Cada orador parece impresionado con un aspecto diferente del problema. Algunos lo están por el derecho de veto que constituye una reserva, otros por el temor de menoscabar la integridad de las convenciones; algunos por la necesidad de admitir reservas, otros por el peligro que presentan las reservas que atañen al fondo de las convenciones. Por ello es indispensable encontrar una solución transaccional.

15. El Sr. Fitzmaurice estima que no se ha insistido bastante en ciertos aspectos de este problema. Sólo se trata actualmente de una clase de convenciones, las concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que planteen reglas de derecho y sean de carácter social y humanitario. En las convenciones de esta clase no se estipulan ventajas para los contratantes, sino solamente obligaciones, a veces demasiado pesadas. Cuando se prevén ventajas, las reservas quedan restringidas. Pero no ocurre esto respecto de las convenciones de que se trata; todo lo contrario.

16. El Sr. Fitzmaurice declara que nunca se le ha respondido satisfactoriamente a esta pregunta: ¿Cómo se podrá garantizar que los Estados no formulen reservas importantes concernientes al fondo de las convenciones? En el sistema panamericano, basta que una o dos de las partes acepten una reserva, para que quienes la hayan formulado lleguen también a ser partes, aunque sus reservas sean de fondo. Es imposible hoy, cuando los países se dividen en grupos bien definidos, obtener objeciones unánimes a una reserva.

17. El Sr. Fitzmaurice deplora que el ejemplo que citó en la 267a. sesión, del caso hipotético sobre la actitud que Hitler hubiera adoptado ante la Convención sobre el Genocidio, haya suscitado tantas objeciones. Propone ejemplos más verosímiles de la aplicación del sistema panamericano. Si el futuro Pacto de Derechos del Hombre contuviera una cláusula en



virtud de la cual cada parte se obligara a garantizar a su población los derechos civiles y políticos y un Estado formulara una reserva a esta cláusula porque una parte de su población estuviera muy atrasada, las opiniones de los demás Estados acerca de si se trataba o no de una reserva de fondo, serían divergentes. Asimismo, si en la convención sobre el Estatuto de los Refugiados alguna cláusula indicara que los refugiados debieran ser admitidos por lo menos durante cinco años en el país que los acogiera, ¿qué ocurriría si un Estado pretendiera reservar su derecho a expulsar a los refugiados al cumplirse dos años, por la única razón de que constituían una carga para el Estado?

18. Ese peligro del sistema panamericano se ha comprobado en el caso de la Convención sobre el Genocidio, y por eso la Comisión tiene ahora sometido a estudio este asunto. En ese sistema, las partes que rechazan una reserva no pueden impedir que el Estado que la presenta llegue a ser parte en la convención. El Sr. Fitzmaurice prefiere que los Estados que deseen formular una reserva de fondo no sean admitidos como partes en la convención, sino que concluyen un nuevo acuerdo con los que quieran aceptar sus reservas. El orador de lectura a un pasaje de la opinión disidente de cuatro magistrados de la Corte Internacional de Justicia (dictamen del 28 de mayo de 1951, págs. 46 y 47) en el cual se afirma que todas las partes deben tener derecho a juzgar la admisibilidad de una reserva, a fin de mantener el principio de la aceptación de obligaciones comunes. El Sr. Fitzmaurice considera erróneo sostener que el que una convención tenga mayor número de partes, sea preferible a que no tenga ninguna. Si las convenciones de las Naciones Unidas contuvieran ventajas para las partes, el sistema panamericano sería quizá admisible, pero no este el caso.

19. Algunos han subrayado que el derecho a formular reservas deriva de la soberanía de los Estados. Es una concepción errónea de la soberanía. Las partes no pueden tener la facultad de escoger ciertas obligaciones de una convención y pasar por alto las demás porque no les convengan. Esto sería la anarquía.

20. Los representantes de Polonia y Bélgica (272a. sesión) han objetado que precisamente la mayoría que prepara la convención es la que rechaza las reservas. No puede ser de otro modo. ¿De qué serviría incluir una cláusula que se pudiera luego rechazar? Las convenciones se fundan en la igualdad entre las partes. Hay una gran diferencia entre los Estados que formulan reservas y los que las rechazan. El Estado que formula una reserva busca un privilegio que debe justificar. Apenas si hay que temer que no sea razonable rechazar una reserva, pero no ocurre lo mismo en cuanto a su presentación.

21. El sistema panamericano no garantiza que las reservas se limiten a puntos de escasa importancia y que no se refieran al fondo de las convenciones. Por ello el Sr. Fitzmaurice opina que conviene estudiar esta cuestión más detenidamente.

22. El representante de Chile (270a. sesión) ha demostrado que la facultad de formular reservas no ha contribuido a favorecer la conclusión de convenciones entre los países de América Latina, puesto que más de la mitad de las convenciones firmadas por esos Estados no han sido ratificadas. Algunas de esas convenciones contienen cláusulas en las que se dispone que no pueden formularse reservas. Las reservas referentes al fondo de esas convenciones han destruido los efectos de éstas. El Sr. Fitzmaurice llega a la con-

clusión de que el sistema panamericano quizá sea cómodo, pero es muy peligroso.

23. Al terminar, el Sr. Fitzmaurice declara que el proyecto de resolución presentado por Dinamarca, India, Irán, Israel, México, Países Bajos, Perú y Suecia (A/C.6/L.198) constituye una transacción razonable. Ese proyecto propone que, en espera de que la Comisión de Derecho Internacional haya terminado su estudio sobre el derecho relativo a los tratados, se invite al Secretario General a continuar la práctica que ha seguido hasta ahora. El Sr. Fitzmaurice confía en que ese proyecto de resolución sea aprobado por la Sexta Comisión.

24. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) recuerda que la cuestión que la Comisión está examinando está vinculada en su origen con la Convención sobre el Genocidio, porque el Secretario General pidió instrucciones que le guiaran en el ejercicio de sus funciones de depositario. Pero esta cuestión se ha planteado luego de un modo general, como había de ocurrir, ya que existen numerosas convenciones concluidas bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones o de las Naciones Unidas, que no han entrado en vigor o respecto de las cuales, si hubieran entrado en vigor, surgiría un problema análogo en el momento de las ratificaciones o adhesiones futuras.

25. Antes de pasar al aspecto general del problema, el Sr. Bartos tiene interés en precisar que su delegación, que en el quinto período de sesiones de la Asamblea se pronunció ante la Sexta Comisión (221a. sesión) contra las reservas a las convenciones multilaterales cuando éstas no contienen cláusula alguna que las prevea, se opone en consecuencia a las reservas a la Convención sobre el Genocidio.

26. Como esta Convención ha entrado ya en vigor, algunas delegaciones proponen que se busque una solución temporal, dando a entender así que el problema inicial ha perdido importancia y se ha resuelto en cierto modo por sí solo. El Sr. Bartos no cree que sea así; la finalidad que consistía en reglamentar la cuestión de la regularidad de los efectos jurídicos de las reservas formuladas *ex post facto*, no se ha conseguido. La mejor prueba de ello es que las ratificaciones presentadas con reservas no han sido consideradas dignas de figurar entre las ratificaciones susceptibles de permitir la entrada en vigor de la Convención.

27. La delegación de Yugoslavia estima que las reservas formuladas hasta ahora en lo concerniente a la Convención sobre el Genocidio, así como las que ulteriormente puedan formularse en el mismo sentido, modifican la esencia misma de la Convención, pues tienden a anular la cláusula que dispone, como única sanción jurídica, que las divergencias concernientes a la interpretación, la aplicación y la ejecución de la convención sean sometidas a la Corte Internacional de Justicia. Autorizar tal reserva equivaldría a declarar que la violación de esa convención por un Estado que hubiera formulado una reserva de esta naturaleza, no podría ser sometida a la Corte y que la obligación de reprimir y prevenir el delito de genocidio se reduciría para dicho Estado a una obligación natural, en tanto que constituiría una obligación *stricto jure* para los Estados que no hubieran formulado tales reservas. En otras palabras, la convención sólo sería una colección de reglas "de buena conducta", cuyo efecto dependería de la buena voluntad de los Estados, los cuales decidirían hasta qué punto deseaban



contraer obligaciones; y algunos de ellos se arrogarían el derecho de pronunciar grandes discursos sobre la cooperación internacional y sobre el respeto al derecho internacional, pero negándose a cooperar efectivamente en estas materias.

28. Actualmente, ante la opinión consultiva de la Corte y el informe de la Comisión de Derecho Internacional, la tarea de la Comisión consiste en primer lugar en resolver la cuestión de las reservas a la Convención sobre el Genocidio; en segundo lugar, en dar instrucciones al Secretario General, como depositario de esta convención y de otras convenciones; finalmente, en adoptar una decisión de principio que se ajuste a las reglas de derecho internacional, mediante la cual pueda asegurarse la estabilidad de las relaciones jurídicas y el desarrollo de la cooperación internacional.

29. Antes de iniciar el examen de la opinión de la Corte y del informe de la Comisión de Derecho Internacional, el Sr. Bartos desea hacer algunas observaciones de carácter general. En apoyo del dictamen de la Corte y del sistema de los Estados americanos, se ha alegado el principio de la universalidad de las convenciones, es decir, la posibilidad de que un mayor número de Estados participen en los instrumentos multilaterales, aceptando obligaciones parciales cuando no puedan asumir la totalidad de las obligaciones impuestas por la Convención. La delegación de Yugoslavia también acepta el principio de la universalidad, pero estima inconcebible que fundándose en ese principio se establezca una desigualdad entre los Estados contratantes. Las obligaciones impuestas por una convención no se yuxtaponen, como lo ha dado a entender el representante de México (270a. sesión); forman un todo indivisible que los Estados contratantes no pueden aceptar parcialmente. La cooperación internacional que, según se ha pretendido, resultaría favorecida con el sistema de los Estados americanos, depende precisamente de que todas las partes contratantes, y no sólo algunas de ellas, respeten todas las obligaciones impuestas por la convención. Se puede preguntar, en efecto, qué provecho obtendría la comunidad internacional con la existencia de convenciones firmadas por un gran número de Estados, la mayoría de los cuales, invocando su soberanía, se negara a aplicar las reglas del derecho internacional. En este sentido, el análisis hecho por el representante de Chile basta para destruir el argumento deducido del principio de universalidad, según el cual el sistema de los Estados americanos estimula las ratificaciones. Por otra parte, no hay duda de que la ratificación de una convención por un Estado no depende en manera alguna de los temores que pueda tener ese Estado sobre la aceptación o el rechazo de sus reservas. El Sr. Bartos no cree, por consiguiente, que la adopción de tal sistema constituya un paso hacia la universalidad; y la delegación de Yugoslavia no puede adherirse a él.

30. Esto no significa en modo alguno que Yugoslavia rechace la posibilidad de las reservas. Las reservas pueden ser formuladas y aceptadas en la medida en que no atenten a la esencia de la convención o den de ésta una mala interpretación. Así es que no se trata de oponerse a las reservas en general, sino al uso abusivo que se haga de ellas, como medio de sustraerse a las obligaciones y de insertar en el texto de la convención disposiciones rechazadas ya en el curso de las negociaciones por haber sido juzgadas entonces contrarias a la finalidad que se quería alcanzar. Por ello, en opinión de la delegación de Yugoes-

lavia, las reservas *ex post facto* son inadmisibles, a menos que el texto del tratado disponga otra cosa. Los Estados deben dar a conocer sus opiniones mientras se está negociando, es decir en el momento en que es usual buscar una solución de transacción.

31. Por otra parte, la cuestión que se plantea no es tanto la del derecho que tienen los Estados de formular reservas, como la del efecto jurídico de esas reservas. Se ha invitado a la Corte Internacional de Justicia a decir si, en su opinión, el Estado que ha formulado una reserva puede considerarse como parte en la convención, mientras mantenga su reserva, si una o más partes objetan a tal reserva, sin que las demás lo hagan. El Sr. Bartos estima que la respuesta a esta pregunta debió ser negativa, ya que la base de las obligaciones convencionales es el propio *consensus* de las partes contratantes. Sin *consensus*, no hay ni tratado, ni normas de derecho internacional, puesto que el tratado constituye la fuente del derecho internacional. El tratado, una vez concluido, no puede ser enmendado sino con el asentimiento de todas las partes contratantes. Si no se acepta este principio, se transforma el tratado multilateral en una suma de tratados bilaterales, lo cual tiende a crear confusiones y a imponer obligaciones desiguales a las partes en el tratado inicial.

32. A este respecto, es sabido que la delegación de Yugoslavia siempre se ha opuesto a la cláusula llamada "colonial" que, en realidad, representa un privilegio concedido a los Estados coloniales, en cuanto a la aplicación de una convención a los territorios coloniales. La delegación de Yugoslavia estima que esa cláusula está fuera de lugar en los tratados multilaterales y desearía que fuera eliminada de la Convención sobre el Genocidio. Sin embargo, por el momento parece imposible hacer una reserva respecto de la referida cláusula, ya que las obligaciones dimanantes de la Convención no pueden ser modificadas por la voluntad de una sola parte, después que está ya elaborado el texto de la Convención. Además, es posible que algunas de las partes en la Convención acepten dicha cláusula porque les concede cierta latitud; y una reserva en ese caso equivaldría, para el Estado cuyo punto de vista no ha triunfado en las negociaciones o que no ha participado en ellas, a obligar a esas partes a adoptar una actitud que no quisieron adoptar al principio.

33. Por otra parte, es claro que una reserva a la cláusula que, en la Convención sobre el Genocidio, dispone que una controversia sobre la interpretación, la aplicación o la ejecución de la Convención debe someterse a la Corte Internacional de Justicia, tendría el efecto de destruir el elemento jurídico de la Convención que reside en la sanción, cuya aplicación se haría imposible. La Corte no sería ya competente en la materia y la Convención dejaría de estar en vigor entre el Estado que hubiera formulado la reserva y los Estados que no la hubieran aceptado, no solamente en cuanto a la cláusula en cuestión, sino, en general, debido a la desaparición del elemento jurídico de la Convención.

34. El Sr. Bartos pasa al principio de la soberanía y al argumento según el cual el sistema de mayorías entraña el derecho irrefutable, para la minoría, de protegerse y no permitir que la mayoría le imponga su voluntad de una manera ilimitada. La delegación de Yugoslavia se ha opuesto siempre a que un Estado imponga por la fuerza su voluntad a otro. Sin embargo, estima que los derechos de la minoría están suficientemente protegidos por el hecho de que un Estado



no esté obligado a aceptar el texto votado por la mayoría. El hecho de privar a un Estado del derecho a pronunciarse acerca de una reserva formulada por otro, equivale precisamente a imponer a la mayoría la voluntad de la minoría. Se ha dicho que un sólo Estado no puede poseer el derecho de excluir de la Convención a un Estado que formule una reserva; pero es igualmente ilegítimo dar al Estado cuya reserva ha sido aceptada por una sola de las partes contratantes el derecho de hacerse parte en la Convención, a pesar de la voluntad expresada por la mayoría. Así, el principio de la soberanía, tal como se aplica en el sistema de los Estados americanos, con el pretexto de proteger a la minoría, equivale a someter a la mayoría a la voluntad de la minoría, es decir a aplicar un sistema antidemocrático. Resulta que los Estados tienen el derecho de aceptar, después de la elaboración del tratado, no solamente reservas, sino incluso su revisión eventual; por ello convendría, opina el Sr. Bartos, atenerse a la sugestión del representante del Reino Unido, de la posibilidad de adoptar, en el caso de convenciones que no contengan disposición alguna sobre reservas, los elementos positivos de los dos sistemas aplicados hasta ahora y llegar así a una solución constructiva.

35. Bajo la influencia de la atmósfera de desconfianza que reina en la Asamblea General, los partidarios del derecho absoluto del Estado a formular reservas parten del principio erróneo de que el Estado que se opone a una reserva obra de mala fe. Si el Estado que formula una reserva considera que obra de buena fe, sería normal que admitiera que los Estados que deben pronunciarse sobre esa reserva también pueden obrar de buena fe. Pero para ello habría que cambiar la atmósfera actual. La mayoría debería examinar con benevolencia las reservas formuladas por la minoría, y la minoría debería mostrarse menos obstinada.

36. Por respeto a la soberanía de cada Estado, la Comunidad internacional no puede imponer obligaciones a Estados que no están dispuestos a aceptarlas. Pero un Estado no debería formular, en nombre de su soberanía, reservas de cualquier clase sin preguntarse si las otras partes estarán dispuestas a aceptarlas, porque con ello atentaría a la soberanía de éstas. La soberanía de un Estado no debe en ningún caso significar la negación de la soberanía de otro Estado. Todo Estado es miembro de la comunidad internacional y debe tomar en cuenta la existencia de otros Estados con los que sostiene relaciones. Entre todos esos Estados deben reinar condiciones de igualdad en lo que concierne a las obligaciones que asumen y a los derechos que se les reconocen. Es ésta una verdad histórica admitida especialmente por los juristas soviéticos. Las normas del derecho internacional existen, a pesar de que sean negadas por algunos. La delegación de Yugoslavia estima que cuando las obligaciones han sido aceptadas en el seno de la comunidad internacional, un Estado no puede modificarlas, invocando su derecho soberano, porque así se le antoje. Tales procedimientos socavarían las bases esenciales del derecho internacional.

37. Ciertos miembros de la Comisión han tratado de establecer analogías entre el derecho internacional y el derecho privado, a fin de justificar el derecho de un Estado a formular reservas. Aun suponiendo que tal analogía exista, la delegación de Yugoslavia no estima que pueda servir de apoyo a la tesis según la cual un Estado soberano tiene un derecho ilimitado en esta materia, en virtud del principio de la autonomía

de la voluntad, y no tiene que esforzarse por obtener el asentimiento de las demás partes, que se considera en cierto modo como adquirido *a priori*. Este es, al parecer de la delegación de Yugoslavia, un concepto peligroso en derecho internacional. En derecho privado la ley y el orden público protegen y limitan la voluntad del individuo. En cambio, en derecho internacional, ese orden público está constituido precisamente por el conjunto de voluntades de los Estados que forman la comunidad internacional. El tratado internacional constituye una ley creada por la voluntad soberana de los Estados y no por la voluntad de los Estados limitada por el orden público; todo Estado debe respetar la expresión de esa voluntad.

38. Partiendo de estas ideas generales, el Sr. Bartos aprueba algunas de las consideraciones formuladas en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, pero no puede aceptar sus conclusiones. Se han citado ciertos pasajes de la referida opinión, para probar que la práctica seguida por la Sociedad de las Naciones y por el Secretario General no representa el derecho internacional existente. Por el contrario, el Sr. Bartos hace notar que la opinión de la Corte contiene numerosas pruebas de la existencia de los principios en los cuales se funda esa práctica. La Corte dice, por ejemplo (p. 21), que es evidente que un Estado, en sus relaciones contractuales, no puede quedar ligado sin su consentimiento y que, por consiguiente, no se puede oponer a él ninguna reserva mientras no haya declarado su conformidad. Como toda convención multilateral es el fruto de un acuerdo libremente concertado sobre sus cláusulas, no puede corresponder a ninguna de las partes contratantes destruir o comprometer, por decisiones unilaterales o por acuerdos particulares, lo que es el objetivo y la razón de ser de la convención; de ello resulta que las reservas tienen que ser aceptadas unánimemente. La Corte reconoce luego que la participación muy amplia en convenciones concluidas bajo los auspicios de un organismo de carácter universal, como las Naciones Unidas, ha originado ya una mayor flexibilidad en la práctica internacional; y hace notar que existe una nueva necesidad, la de aligerar el procedimiento de las convenciones multilaterales.

39. Prosiguiendo este razonamiento, la Corte llega entonces a una conclusión que, en opinión de la delegación de Yugoslavia, es incorrecta e insperada. Se puede presumir, dice la Corte, que las partes en la Convención sobre el Genocidio han querido autorizar las reservas. Esta presunción queda categóricamente refutada en la opinión disidente de cuatro jueces y la del juez Sr. Alvarez que hacen notar que el primer proyecto de convención contenía un artículo consagrado a las reservas y que un subcomité integrado por los representantes de Polonia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos de América, decidió que no había lugar a prever reservas, decisión que fué aceptada por unanimidad por el Comité especial sobre el Genocidio. Por ello la Asamblea General partió del principio clásico de que las reservas no se admiten sino cuando las partes lo decidan así previamente y lo declaren expresamente. La mayoría de los jueces de la Corte perdió de vista ese hecho y buscó una solución políticamente aceptable, presumiendo que la intención de la Asamblea General y de los Estados contratantes era agrupar al mayor número posible de Estados en torno a la Convención. De ello concluyó que la tendencia a la universalidad debía ser la norma de conducta que guía



a cada Estado al apreciar lo que le compete hacer individualmente y por su propia cuenta con respecto a la legitimidad de una reserva. La delegación de Yugoslavia acepta esta conclusión, pero estima que hay que tener en cuenta el hecho de que la Asamblea General, al aprobar el proyecto de Convención, buscaba el derecho estricto y no una norma de conducta.

40. Es interesante notar que la Corte haya sacado, del hecho de que las objeciones contra las reservas sean escasas, la conclusión de que el principio de la integridad de las convenciones no se ha transformado en norma de derecho internacional. Este hecho sería más bien la prueba de que las reservas son una excepción y una ventaja que por cortesía se reconoce a los Estados, y probaría también que los Estados autorizados a formular objeciones no han abusado de ese derecho. Pero esto no significa que tales Estados hayan puesto en tela de juicio los principios en los cuales se fundaba la práctica de la Sociedad de las Naciones. Esta observación no autoriza, por tanto, a la Corte a considerar que el carácter especial de la Convención sobre el Genocidio deba imponer una solución especial.

41. La Corte ha planteado entonces el criterio de la compatibilidad. Pero no ha precisado quién estaría encargado de aplicar ese criterio, dejando así a cada Estado la tarea de hacerlo. ¿Qué ocurriría si se formularan reservas contra las disposiciones de la Convención que estipulan que la Corte es competente para resolver las controversias relativas a la interpretación y la aplicación de la Convención? El litigio sería insoluble. Esta noción introduce, pues, un elemento arbitrario y, habiendo declarado la Corte que un Estado que formule una reserva puede ser parte en la Convención siempre que la reserva sea compatible con el objeto y propósito de la Convención y no puede serlo en el caso contrario, no se sabrá jamás si un Estado es o no es parte en la Convención. La apreciación de la compatibilidad de una reserva es muy a menudo una cuestión política. Si la competencia en esta materia se atribuyese a la Corte, ésta quedaría tal vez transformada en un órgano político. Si los Estados contratantes hubiesen decidido no admitir las reservas, como

en el caso de la Convención sobre el Genocidio, la Corte debería desde luego hacer abstracción de esta voluntad de las partes, para poder aplicar el criterio de la compatibilidad.

42. Por lo tanto, la delegación de Yugoslavia no acepta la opinión de la Corte, porque no resuelve la cuestión y propone una solución que sólo puede complicar más un problema ya complejo. El Sr. Bartos estima, como el representante del Brasil, que el criterio propuesto por la Corte es enteramente nuevo y no está fundado en el derecho internacional existente. Teniendo en cuenta, como lo ha hecho la Corte, el carácter especial de la Convención sobre el Genocidio, el Sr. Bartos llega a una solución contraria, a saber: que hay que atenerse a la práctica de la Sociedad de las Naciones y del Secretario General, la cual se ajusta a la teoría del derecho clásico, defendida por numerosos autores. La delegación de Yugoslavia opina que ese sistema debería aplicarse a otras convenciones que a menudo son de menor importancia y que, por consiguiente, no entrañarían el riesgo de provocar numerosas dificultades.

43. Examinando luego el informe de la Comisión de Derecho Internacional, el Sr. Bartos declara que su delegación acepta las conclusiones que figuran en él y apoya especialmente la contenida en el párrafo 33, por la que recomienda insertar en las convenciones multilaterales disposiciones referentes a la admisibilidad o inadmisibilidad de reservas y a los efectos que hayan de atribuirse a éstas. Cita el caso de la Convención sobre el estatuto de los refugiados, que contiene una cláusula explícita referente a las reservas.

44. El Sr. Bartos declara que quizá votará en favor del proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.198), a fin de reservarse la posibilidad de estudiar nuevamente una cuestión tan importante, que es de naturaleza tanto política como jurídica. Estima a este respecto, como el representante del Reino Unido, que hay que dejar a la Comisión la posibilidad de reflexionar.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.